



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

Distrito Judicial de Bucaramanga (Santander)
Tribunal Superior
Sala Penal

BUCARAMANGA, ABRIL 18 DE 2023

DELITO/ASUNTO	RAD.	PROCESADO /ACCIONANTE	INSTANCI A	FECHA AUTO	CLASE DE AUTO
Acceso Carnal Violento Agravado y otros	2011-01529-04 (21-011Adol)	Exson Alirio Anaya Espinosa y otros	2DA	12 de abril de 2023	RESUELVE: Declara extinguida por prescripción la acción penal.
Fabricación, Tráfico y porte de armas de fuego	2022-05261 (22-865ª)	Candy Lizmar Sandoval Escalona	2DA	17 de Abril de 2023	RESUELVE: Desistimiento de Apelación Aceptar recurso de

FIRMA:

Sandra Jullieth Cortés Samacá
Secretaria

secpenalbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

Oficina 405 Cl. 35 # 11-12, Bucaramanga, Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA

SALA DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES

Magistrada Ponente: Shirle Eugenia Mercado Lora

Radicación: 680016001280-2011-01529-04 (21-011ADOL)
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga
Procesados: Exson Alirio Anaya Espinosa, Omar Alexander Flórez Rivero, Jerson Esneider Rojas, Johan Sebastián Moreno Rodríguez, Jeison Garnica Lizarazo.
Delito: Acceso carnal violento agravado y otros.
Apelación: Niega solicitud de preclusión
Decisión: Decreta prescripción
Aprobado: Acta N° 332
Fecha: 12 de abril de 2023

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los defensores de Jerson Esneider Rojas y Jeison Garnica Lizarazo contra el auto del 29 de abril de 2021 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga mediante el cual se rechazó la solicitud de preclusión elevada por la defensa por el punible de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo y, a su vez, se decretó la preclusión de la investigación adelantada contra los adolescentes Exson Alirio Anaya Espinosa, Omar Alexander Flórez Rivero, Johan Sebastián Moreno Rodríguez, Jerson Esneider Rojas y Jeisson Garnica Lizarazo por los punible de secuestro simple agravado y lesiones personales dolosas agravadas.

II. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Conforme se reseñó en el escrito de acusación¹:

“EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SIENDO LAS 22:26 HORAS, MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL INFORMARON AL COMANDANTE QUE DEL CAI VIADUCTO LES MANIFESTÓ QUE A ESAS INSTALACIONES HABÍAN LLEGADO DOS NIÑAS DE TRECE AÑOS DE EDAD QUIENES MANIFESTARON QUE DOS SUJETOS LAS INTIMIDARON CON NAVAJAS LAS HICIERON SUBIR POR UNAS ESCALERAS HACIA UNA RAMPA EN UNA ZONA BOScosa DEL BARRIO EL SOL DONDE DE MANERA VIOLENTA FUERON ACCEDIDAS CARNALMENTE, QUE ELLAS CONOCÍAN APROXIMADAMENTE TRES DE LOS SUJETOS QUE LAS VIOLARON Y QUE INCLUSO LOS TENÍAN EN SU PERFIL DE AMIGOS EN LA RED SOCIAL DE FACEBOOK, LOS OTROS LOS DISTINGUÍAN POR VIVIR EN EL SECTOR CIRCUNVECINO A SU BARRIO. DEL MISMO MODO LAS MENORES IDENTIFICARON A LOS IMPUTADOS COMO JEISSON APODO CHISPUN QUIEN SE ENCUENTRA PROCESADO DENTRO DE OTRO CUI POR EL MISMO DELITO EN CALIDAD DE COAUTOR, ADEMÁS A OMAR ALEXANDER FLOREZ A QUIEN CONOCÍAN CON EL APODO PELOS; EXSON ALIRIO ANAYA ESPINOSA APODADO EL CHINCHE MENOR; SEBASTIÁN CONOCIDO CON EL APODO DE CAVELA Y CHINCHE MENOR QUIEN SE LLAMA JERSON ESNEIDER ROJAS; ALIAS PABLITO Y JEISSON GARNICA APODADO CHISPUN FUERON APREHENDIDOS EN SITUACIÓN DE FLAGRANCIA Y A AQUEL LE FUE ENCONTRADA UN ARMA CORTOPUNZANTE.

LAS VICTIMAS CONTARON A SUS PADRES LOS SUCEDIDO, MANIFESTANDO QUE LAS DOS MENORES HABIAN SALIDO A DAR UNA VUELTA HACIA EL BARRIO EL SOL BARRIO CIRCUNVECINO DEL LUGAR DE LA RESIENCIA DE AQUELLAS, APROXIMADAMENTE A LAS SEIS Y TREINTA DE LA TARDE, QUE AL REGRESAR HACIA SU CASA APARECIERON DOS SUJETOS QUIENES MEDIANTE EL USO DE ARMAS BLANCAS LAS AMENAZARON Y LAS CONDUJETON POR UNAS ESCALERAS HACIA UNA RAMPA CERCA DEUNA ZONA BOScosa, UNA VEZ ALLI UNO DE LOS SUJETOS SILVÓ Y FUERON APARECIENDO VARIOS SUJETOS MAS EN UN TOTAL DE DIEZ A QUINCE APROXIMADAMENTE, QUE ESTOS LES DIJERON QUE SI NO SE DESNUDABAN LAS APUÑALEABAN, LES QUITARON LA ROPA A LA FUERZA, LAS GOLPEARON A PATADAS, CACHETADAS EN U CUERPO Y CARA, LES OBLIGARON A APAGAR SUS CELULARES, LAS SEPARARON A LAS DOS, LLEVANDOSE A UNA DE ELLAS HACIA OTRO SITIO Y LAS ACCEDIERON CARNALMENTE UNO A UNO, DE MANERA VAGINAL, ORAL Y ANAL; EN TANTO QUE OTROS MIRABAN, TOCABAN Y HASTA SE MASTURBABAN QUE ENTRE ELLOS SE DECIAN “HAGALE POR DETRÁS, PONGALAS A MAMAR”, Y “TRANQUILOS QUE SI QUEDAN EMBARAZADAS ESAS PIROBAS

¹ Folios No. 89 a 100.

NO SABEN QUIEN FUE” IGUALMENTE SEÑALARON QUE LOS SUJETOS LES MAANIFESTABAN QUE LAS VIOLABAN POR DEL DEL BARRIO SAN MARTIN, QUE HUBO TOMA DE FOTOGRAFIAS POR PARTE DE ESTOS Y QUE LOS HECHOS DURARON APROXIMADAMENTE CUATRO HORAS PUES ESTOS SUJETOS LAS VIOLABAN UNA Y OTRA VEZ, POSTERIORMENTE LAS AMENAZAN DICIENDOLES QUE SI LE INFORMABAN A LA POLICIA LO OCURRIDO LAS IBAN A MATAR, LUEGO DE ACCEDER A LAS MENORES, A UNA DE ELLAS SE LE ORDENO QUE SE FUERA “QUE YA HABÍA ACABADO LA FIESTA” POR LO QUE ESTA BAJO HACIA DONDE TENIAN A SU AMIGA Y SALIERON EN BUSCA DE AYUDA AL CAI DE LA POLICIA A DONDE LLEGARON SUS FAMILIARES, QUIENES LAS ESTABAN BUSCANDO HORAS ATRÁS (...)” (sic).

III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

3.1. El 14 de septiembre de 2011 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, se surtió audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, en contra de Jeison Garnica Lizarazo, como presunto coautor de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con los delitos de secuestro simple y lesiones personales dolosas, cargos que no fueron aceptados por el adolescente. En dicha oportunidad se le impuso medida de internamiento preventivo con fines pedagógicos, en centro especializado Hogares Claret.

3.2. Radicado el escrito de acusación, las actuaciones de conocimiento le correspondieron por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga, realizándose la audiencia de acusación el 17 de noviembre de 2011 y la audiencia preparatoria en sesiones del 19 de diciembre de 2011 y 19 de enero de 2012, oportunidad en la que se decidió respecto del decreto probatorio, decisión contra la cual el ente acusador interpuso recurso de apelación.

3.3. Seguidamente, el 22 de diciembre de 2011 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, se prorrogó la medida de internamiento preventivo impuesta al adolescente Jeison Garnica Lizarazo por un (1) mes más.

3.4. A su vez, el 1 de febrero de 2012 el Tribunal superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala de Asuntos Penales para Adolescentes- se declaró inhibida para conocer del recurso de apelación contra el auto del 19 de enero de 2012 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga.

3.5. Por otra parte, el 22 de marzo de 2012 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, se surtió audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, en contra de Omar Alexander Flórez Riveros, Jerson Esneider Rojas, Johan Sebastián Moreno Rodríguez y Exson Alirio Anaya Espinosa, como presuntos coautores de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con los delitos de secuestro simple y lesiones personales dolosas, cargos que no fueron aceptados por los adolescentes. En dicha oportunidad se les impuso medida de internamiento preventivo con fines pedagógicos, en centro especializado Hogares Claret.

3.6. Radicado el escrito de acusación, las actuaciones de conocimiento le correspondieron por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes el 18 de abril de 2012.

3.7. Así, el 14 de mayo de 2012 el Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescente con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga se declaró impedido para conocer del juicio seguido contra los adolescentes Exson Alirio Anaya Espinosa, Omar Alexander Flórez Rivero, Johan Sebastián Moreno Rodríguez y Jerson Esneider Rojas y ordenó enviar el trámite al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga.

3.8. En ese sentido, la Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga el 14 de junio de 2012 resolvió no declararse impedida y tener como

recusación los reparos de los defensores, no obstante, suspendió la diligencia para sustentar en debida forma la correspondiente decisión.

3.9. Así las cosas, el 20 de junio de 2012 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga resolvió no aceptar la recusación propuesta por los defensores y, en consecuencia, remitir inmediatamente la presente actuación, así como la que cursa bajo el CUI 2012-00055 a la Sala Mixta de asuntos penales del Tribunal Superior Judicial de Bucaramanga.

3.10. El 13 de julio de 2012 esta Corporación resolvió declarar infundada la causal de recusación invocada y remitir el diligenciamiento al despacho de origen para que se continúe con el trámite.

3.11. Seguidamente, el 23 de julio de 2012, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga, una vez surtida la audiencia de formulación de acusación bajo el trámite 680016001280-2011-01529, se decretó la conexidad de las acusaciones formuladas en el proceso con CUI 680016000000-2012-00055, con el presente trámite y se dispuso suspender la seguida bajo el CUI 20120-00055 hasta que las dos actuaciones se encuentren en el mismo estado para llevar a cabo el juicio oral.

3.12. Luego, la audiencia preparatoria bajo el CUI 680016001280-2011-01529 se llevó a cabo en sesiones del 4 de abril de 2013, 25 de junio de 2013, 21 de octubre de 2013, oportunidad en la que el abogado de Jerson Esneider Rojas pone en conocimiento del despacho una solicitud elevada ante los jueces de control de garantías respecto de la cual el juez de control de garantías se declaró incompetente.

3.13. Así, el 27 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga declaró que carece de competencia para conocer de

la solicitud probatoria realizada por el abogado Carlos Alfonso Peñaranda Molina y ordenó la remisión inmediata de la actuación a esta Corporación.

3.14. Al margen de lo anterior, el 2 de julio de 2015 se continuó con la audiencia preparatoria, oportunidad en la que se elevó solicitud de nulidad por parte de la abogada Lyda Yazmin Farfán que fue coadyuvada por otros sujetos procesales.

3.15. Con ocasión a ello, el 9 de septiembre de 2015 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga resolvió “Decretar la nulidad parcial de la presente actuación conexada a partir de la audiencia preparatoria del 19 de diciembre de 2011, realiza en la actuación con radicado anterior 680016000000-2012-00055 por la acusación formulada a Jeison Garnica Lizarazo, así como a partir de la audiencia preparatoria del 31 de enero de 2013 en la actuación con radicado al 68001600122802011-01529 por la acusación formulada contra Omar Alexander Flórez Rivero, Exson Alirio Anaya Espinosa Johan Sebastián Moreno Rodríguez y Jeison Esneider Rojas para que se rehaga la audiencia preparatoria para juicio oral con intervención de todas las partes e intervinientes de las acusaciones conexadas (...)”.

3.16. Acto seguido, la audiencia preparatoria se adelantó en sesiones del 12 de septiembre de 2018, 2 de noviembre de 2018, 18 de febrero de 2019 y 6 de febrero de 2020, oportunidad en la que los defensores elevaron solicitud de preclusión de la investigación por la prescripción de la acción penal.

3.17. Luego, tras algunos aplazamientos el 11 de febrero de 2021 se dio inicio a la lectura de la decisión respecto de esta solicitud, diligencia que debió ser suspendida por fallas en la comunicación de la defensora Delia Moreno Rodríguez.

3.18. Finalmente, el 29 de abril de 2021 se continuó con la lectura de la decisión, determinación contra la cual los defensores de Jerson Esneider Rojas y Jeison Garnica Lizarazo interpusieron recurso de apelación.

3.19. En ese sentido, el 20 de mayo de 2021 el juzgado de conocimiento remitió el trámite a la oficina judicial de la seccional Bucaramanga. Asunto que fue asignado por reparto del 24 de mayo de 2021 a esta Sala de Decisión.

3.20. El 7 de octubre de 2022 se expidió constancia del trámite surtido en el despacho con ocasión al presente proceso, el cual no fue registrado en el inventario de procesos al despacho por la funcionaria que ostentaba el cargo de Auxiliar Judicial Grado I para la fecha en la que ingresó al despacho.

3.21. Finalmente, el 31 de marzo de 2023 se expide constancia respecto del grado de congestión del despacho y de los asuntos evacuados en los últimos 5 meses, que impidieron tramitar el presente trámite en el lapso comprendido desde el 7 de octubre de 2022 al mes de marzo de 2023.

IV. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga, tras realizar un detallado recuento procesal y sintetizar las intervenciones de las partes e intervinientes, en punto de los aspectos objeto de recurso se pronunció así:

Sobre el particular, señaló que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión de Tutelas No. 3, en el fallo STP 15849-2018 proferido el 5 de diciembre de 2018 bajo el radicado 101335 siendo Magistrado Ponente el Dr. Eugenio Fernández Carlier, señaló cinco reglas de prescripción de la acción penal en procesos seguidos contra los adolescentes bajo la ley 1098 de 2006, estableciendo que para calcular el término a computar se tiene que tener en cuenta el señalado en las sanciones especiales previstas en la misma.

No obstante, indicó que el referido pronunciamiento fue claro y expreso en señalar que se exceptúan los delitos contra la libertad, integridad y formación

sexual, o el incesto, cometidos en menores de edad como ocurre en el caso en concreto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 que adicionó el artículo 83 del Código Penal. Seguidamente, hizo alusión al extracto jurisprudencial que establece la reseñada tesis.

Continuó su argumentación, señalando que, de las 5 reglas expuestas por la suprema corporación, resulta pertinente traer a colación las siguientes por estar relacionadas con un delito contra la libertad sexual, por el cual se procede:

“(iii) Si se trata de adolescente de entre catorce y dieciocho años vinculado con la comisión de delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, el término será de ocho años contados desde la ocurrencia del hecho, según lo prevén el inciso 3° del artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.

(...)

(v) Luego de formulada la imputación, el conteo del término se interrumpirá y volverá a correr por un lapso igual a la mitad del originalmente previsto, sin que en tal evento, como lo dispone el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, pueda ser inferior a tres años. En estos casos, debe atenderse a las reglas especiales previstas en los incisos 2° y 3° del artículo 83 de la Ley 599 de 2000; así, luego de formulada la imputación, el término prescriptivo será de 15 años cuando se trate de delitos de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista o desplazamiento forzado (inciso 2°); será de 10 años cuando se proceda por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o incesto, cometidos en menores de edad (inciso 3°)...”

Al margen de lo anterior, destacó que la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional en sentencia T-023 del 28 de enero de 2019 siendo Magistrado Ponente el Dr. Carlos Bernal Pulido, con salvamento de voto de la H. Magistrada Diana Fajardo Rivera, señaló que el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 resulta inaplicable cuando el presunto victimario sea menor de edad al momento de la presunta comisión del delito.

Así las cosas, afirmó que resulta claro que existen pronunciamientos contradictorios de órganos de cierre de la administración de justicia, no obstante, indicó que estos no se constituyen en precedente jurisprudencial de obligatoria aplicación, ya que son sentencias de tutela con efectos inter-partes.

En ese orden de ideas, reseñó que se aparta respetuosamente del criterio de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, y anunció la improcedencia de lo solicitado, en el entendido que se debe tener en cuenta el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 consagra expresamente una excepción a la prescripción ordinaria.

Además, refirió que el legislador, fundado en la naturaleza grave de los delitos señalados, y en la condición especial de la presunta víctima -minoría de edad- modificó los parámetros a tener en cuenta para configuración de la prescripción de la acción penal, en el que se parta de un límite cronológico que se determina en cada caso de conformidad con la condición personal de la víctima.

Luego, indicó que en el caso en concreto al interrumpirse el término prescriptivo con la formulación de imputación, frente a la situación del adolescente Jeisson Garnica Lizarazo se configura el 14 de septiembre de 2021, mientras que para los adolescentes Exson Alirio Anaya Espinosa, Omar Alexander Flórez Rivero, Johan Sebastián Moreno Rodríguez y Jerson Esneider Rojas se configura el 22 de marzo de 2022, concluyendo que el término prescriptivo no se ha cumplido para el delito contra la libertad, integridad y formación sexual, motivo por el cual rechazó la preclusión solicitada

Seguidamente, calificó de interesantes los planteamientos presentados frente al cumplimiento de los fines del proceso y de la sanción en el SRPA, advirtiendo que una interpretación sistemática y teleológica de la normatividad que regula el asunto en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes genera gran preocupación hasta para el más desprevenido intérprete.

No obstante, refirió que por mucho que se quiera no podemos sustraernos al hecho de que hasta que no se declare la inconstitucionalidad de la ley que regula

la prescripción extraordinaria, esta se predicara y aplicará en todos los casos y procesos por los delitos ya indicados en los que la víctima sea menor de edad, sin distinción alguna, aun cuando el presunto victimario sea adolescente.

Además, destacó que no se puede desconocer lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 porque: (i) no se configura causal alguna de cesación de eficacia de la referida ley, (ii) se cumple la condición de vigencia de la misma y (iii) produce efectos, ya que no se encuentra suspendida, y la Corte Constitucional no la ha retirado del ordenamiento jurídico por inconstitucional

Igualmente, descartó la aplicabilidad de la excepción de inconstitucionalidad, ya que no se cumplen los presupuestos constitucionales para ello.

Por otra parte, señaló que la Ley 1154 de 20087, es una norma posterior y especial a la Ley 1098 de 2006 destacándose que el legislador no excluyó de la prescripción extraordinaria a los adolescentes pasibles de sanción en el SRPA.

Así, afirmó que no existe inconstitucionalidad alguna con base en el presunto desconocimiento del interés superior y los derechos fundamentales de los adolescentes acusados, en el entendido que la víctima, en este y todos los casos análogos, cuenta con la misma protección constitucional reforzada que se predica de los adolescentes en conflicto con la ley penal, con el ítem de mayor vulnerabilidad frente a un adolescente que ha ejecutado un delito que perjudica a la presunta víctima. En ese sentido, indicó que debe realizarse un juicio de ponderación de los derechos fundamentales en juego, juicio que no le compete al juez del proceso penal, sino a la H. Corte Constitucional a través del ejercicio de la acción pública correspondiente.

Finalmente, refirió que la Ley 2081 del 3 de febrero de 2021 no entra en consideración, pues no rige para el caso en estudio.

V. DEL RECURSO

5.1 Recurrentes:

5.1.1 Defensa de Jerson Esneider Rojas

Inconforme con la decisión de primera instancia, la defensora interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la decisión adoptada por el Juzgado Primero del Circuito de Conocimiento para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, argumentando que como lo concluye la juez de primera instancia, se ha presentado un conflicto de disparidad de criterios entorno al cómputo del término prescriptivo del régimen penal para adolescentes.

En ese sentido, planteó que el problema jurídico a resolver es que esos criterios y términos de prescripción no los tenemos en el Código de Infancia y Adolescencia, y por eso, por remisión nos vamos al régimen penal para adultos, pero sin violentar los principios constitucionales y legales que rigen el sistema penal para adolescentes.

Así, tras hacer referencia al contenido del artículo 5 y 6 del Código de Infancia y Adolescencia, indicó que se está aplicando una norma de la Ley 906 de 2004 que corresponde a las sanciones para adultos, en preferencia a las que rigen en el código de adolescentes.

Además, indicó que el artículo 187 prevé las sanciones para nuestros adolescentes que infringen la normatividad y entre ellos para los delitos sexuales, vemos que es privativa de la libertad y que es la máxima prevista en la ley, y que es de 8 años.

En ese sentido, afirmó que no existe motivo para remitirse al código para adultos para aplicación de una sanción, pues ello implicaría la aplicación de sanciones para adultos que riñe con los principios de la sanción y del sistema de

responsabilidad penal para adolescente, que tiene un carácter diferencial, específico y pedagógico.

Sobre el particular, cuestionó en donde se encuentra el fin pedagógico del sistema penal para adolescente al sancionar a adultos acercándose a los 30 años, pues de ese modo no existiría ese sistema específico y diferenciado, en el entendido que no se podría cumplir con esa finalidad educativa, restaurativa y proyectora, cuando ya ha pasado suficiente tiempo para adelantar el proceso contra del adolescente, máxime cuando uno de sus derechos constitucionales es que se le dé una justicia pronta.

En suma, hace alusión al artículo 9 que señala que, en caso de conflicto de normas, se aplicará la más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente, lo que no se está aplicando en el caso en concreto que se le da aplicabilidad a una norma para adultos que va en contravía de los fines del sistema para adolescentes.

Continuó su argumentación, haciendo referencia al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 5 de diciembre de 2018 con ponencia del Dr. Eugenio Fernández Carlier, afirmando que en ese caso el magistrado se extralimitó ya que no se pueden aplicar las penas previstas para los adultos.

En suma, destacó que un mes después se profirió la decisión de la Corte Constitucional que se aparta de dicho planteamiento, la cual avala en el entendido que deja sin salida los principios que sustentan el sistema de enjuiciamiento juvenil, especialmente el derecho que le asiste al adolescente de que el proceso se tramite sin demoras, pues se desatendería la garantía de imposición de una sanción pronta en el tiempo, que consulte los propósitos de protección, educación y restauración.

En ese orden de ideas, afirmó que la decisión de la Corte Constitucional es aplicable al caso en concreto en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 1 de la Ley 1154 de 2007.

Finalmente, afirma que ya operó la prescripción en el caso en concreto, ya que los hechos fueron del 12 de septiembre de 2011, la imputación el 22 de marzo de 2012, y atendiendo a la sanción prevista en la ley, la acción penal prescribió el 12 de marzo de 2016, ya que no puede dársele aplicación al inciso 3 del artículo 83 del Código Penal pues ello haría infructuoso todo lo que se quiso lograr con esta legislación diferenciada, ya que no podría dársele aplicabilidad a los principios y finalidades del sistema de responsabilidad penal.

Así, reiteró su solicitud para que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se decrete la preclusión de la acción penal por prescripción.

5.1.2 Defensa de Jeison Garnica Lizarazo

Inconforme con la decisión de primera instancia el defensor interpuso recurso de apelación argumentando que vale la pena plantear al Tribunal Superior la problemática que se presenta en el caso en concreto, a fin de establecer si es posible establecer en el marco del choque de trenes que evidentemente se ha presentado entre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 101355 del año 2018 y la acción de tutela T-023 del 2019 algún punto diferenciado que permita resolver el problema jurídico.

Seguidamente, indicó que desde hace algunos años dentro del marco de interpretación de derechos humanos la jurisprudencia nacional, utiliza los enfoques diferenciales como forma de creación de una nueva jurisprudencia.

Así, señaló que la sentencia 101355 del 2018 es el resultado de los enfoques diferenciales presentes en la jurisprudencia nacional, pues allí la Corte Suprema de Justicia valiéndose de aquellos, estableció que los términos de prescripción el sistema de adolescente no podían ser los términos de los adultos, y que por tal razón cada una de las decisiones que se tomen dentro de este sistema deben partir de esas condiciones específicas inherentes a los adolescentes.

Como primer problema jurídico, se refirió a la aplicación o no del artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 en los términos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, que implica un desconocimiento del principio organizador del Sistema de Responsabilidad Juvenil, ya que al concebir la aplicación impositiva del artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 se desconociera ese trato diferenciado que los jóvenes merecen respecto de los adultos.

Por otra parte, planteó un segundo problema jurídico con relación a la vigencia de la acción penal en el término del tiempo, es decir si el sostenimiento de la acción penal satisface deontológicamente el deber ser del Sistema de responsabilidad Penal Juvenil y además garantiza los fines de las víctimas, frente a la efectiva reparación.

Así las cosas, señaló que, respetando el criterio de la Corte Suprema de Justicia, hay varios aspectos que permiten concluir desde una perspectiva objetiva que no es admisible la interpretación y aceptación del artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 desde la perspectiva de la Ley 1098 de 2006, ello desde una interpretación eminentemente temporal, relacionada con la vigencia de las leyes en el tiempo.

Sobre el particular, destacó que, si bien la Ley 1154 de 2007 fue expedida con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1098 de 2006, no obstante, la Ley 1154 de 2006 inició su discusión el 29 de septiembre de 2006, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Procesamiento juvenil.

En otras palabras, afirmó que cuando se inició la discusión de la Ley 1154 aún no estaba vigente el Código de Infancia y Adolescencia, luego no se puede hablar de discusión de una norma ya vigente. Señalando que este es el argumento para la no aplicación de la Ley 1154, al no haberse realizado respecto de una Ley vigente. Además, tras referirse a la exposición de motivos de la Ley 1154 de 2007 indicó que esta disposición normativa está orientada a la protección de los menores frente a las agresiones cometidas respecto de quienes ellos no están en capacidad de aceptar su vulnerabilidad, concluyendo que dicha norma no cuenta con un

enfoque diferencial basado en la edad precisamente porque cuando se inició sobre su discusión el Código de Infancia y Adolescencia aún no se encontraba vigente.

En suma, señaló que en la exposición de motivos el legislador dejó ver que la protección del menor frente al agresor respecto de quien se extendían los términos de la prescripción de la acción penal, tenía precisamente un alcance frente a un adulto y no frente a un adolescente, afirmando además, que por técnica legislativa, argumentación y contenido legislativo, la norma que se está aplicando de naturaleza restrictiva, no contaba con enfoque definido a establecer términos para aplicar en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

En cuanto al segundo problema jurídico planteado, reseñó que la aplicación de la Ley 1154 de 2007 al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, acarrea dos circunstancias particulares, la primera es que ello llevaría al juzgamiento de personas cercanas a los cuarenta años en el precitado sistema, personas que podrían exceder en edad hasta a los jueces de infancia y adolescencia, a los defensores de familia y fiscales, en ese sentido se aplicarían sanciones solo para responsabilizar al ciudadano, sin ningún tipo de reproche material, distinto al moral de encontrarlo culpable.

Además, refirió que ello podría desencadenar en arbitrariedades legales e ineficiencias equitativas con los fines del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, realizando el análisis de la vigencia total de la acción penal en el evento de dársele aplicación a la ley 1154 de 2007, reiterando a partir de esto que se podría llegar al caso hipotético de juzgar en el Sistema de Responsabilidad Juvenil a un adolescente de 57 años de edad.

Finalmente, solicitó que se analice desde una perspectiva de enfoque diferenciado con fundamento en la edad la inaplicación de la Ley 1154 de 2007 de cara a los fines de necesidad y eficiencia del sistema de responsabilidad Penal Juvenil. En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión de primer grado y se declare prescrito el delito sexual respecto del adolescente Jeison Garnica Lizarazo.

5.2 No recurrentes

5.2.1 Fiscalía General de la Nación

Como sujeto procesal no recurrente la delegada de la fiscalía solicitó que se mantenga la decisión adoptada por el juzgado de primera instancia, en el entendido que existe pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STP849 de 2018 que tuvo en cuenta la excepción contenida en el artículo 1 de la ley 1154 de 2007 en lo que tiene que ver con los delitos contra la integridad y formación sexuales cuando las víctimas son menores de edad.

En ese sentido, señaló que aún no se da la causal objetiva dentro del presente trámite, comoquiera que de conformidad con los argumentos expuestos por el A quo deben prevalecer los derechos de las menores víctimas, pues si bien se está ante un sistema diferenciado y pedagógico, no puede perderse de vista que el legislador no sólo debe proteger a los menores que cometen delitos, sino también los derechos de las menores víctimas, que en el caso concreto son menores de 13 años.

Finalmente, reiteró su solicitud de que se mantenga la decisión de primera instancia, y se continúen con las audiencias que faltan por desarrollarse, comoquiera que no ha prescrito la acción penal.

5.2.1 Representante de víctimas

Por su parte, la apoderada de las víctimas destacó que la decisión adoptada por el A quo es acertada en lo que tiene que ver con las argumentaciones jurídicas de las discrepancias surgidas por los términos de prescripción.

Además, destacó que ya exista una decisión de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con el estudio de la prescripción en este tipo de delitos, a

su cómo un pronunciamiento del Tribunal Superior e Bucaramanga de radicado 2014-01750 con ponencia del Magistrado Antonio Bohórquez Orduz.

En ese sentido, solicitó que no se tenga en cuenta la argumentación de la defensa como como una debida sustentación para el recurso de apelación, en tanto el Tribunal ha recabado la decisión de la Corte y ha indicado que se toman los diez años posteriores a la imputación, como acertadamente lo indicó el A quo.

También, reseñó que conceder el recurso impetrado cuando el Tribunal ya se ha pronunciado y ha dejado clara las reglas que se deben seguir para el estudio de la causal objetiva de prescripción, sería menoscabar aún más la situación de las víctimas y dilatar más el proceso, razones por las que solicitó se dé aplicación al artículo 178 y se declare desierto el mismo.

Como petición subsidiaria a la anterior, solicitó que se mantenga la decisión de primera instancia en lo que tiene que ver con la no prescripción del delito de acceso carnal violento.

5.2.1 Ministerio Público

Como sujeto procesal no recurrente, la delegada del Ministerio Público solicitó que se confirme la decisión de primera instancia argumentando que el legislador no hizo diferencias en cuanto a la aplicación de la Ley 1154 de 2007 para los adolescentes, pues si bien el abogado defensor Cesa Pinilla realizó un estudio juicioso de la Ley 1154 de 2007 y el Código de Infancia y Adolescencia, lo cierto es que ambas fueron expedidas por el Congreso de la República, mismo cuerpo legislativo que se presume debe conocer lo que ha legislado y sobre lo que va a legislar.

Lo anterior, en el entendido que cuando se legisló sobre la Ley 1154 ya existía el Código de Infancia y Adolescencia y así no se encontrara vigente, existía el Decreto 2737 de 1989 -Código del Menor-, luego los congresistas al hablar de unos términos de prescripción eran conscientes de que existía una justicia de

adolescentes, independientemente que fuera la Ley 1098 de 2006 o el Decreto 2737, y sin embargo, no hicieron diferencia alguna.

En ese sentido, afirmó que no es dable realizar dicha diferenciación, pues se debe dar una interpretación exegética de la ley tratándose de un tema tan delicado como este, la prescripción de la acción penal como una causal objetiva.

En lo que atañe a los artículos 5, 6, 9 y demás del Código de Infancia, indicó que son normas aplicables tanto para las víctimas como para los victimarios, destacando que en el caso concreto se trata de unas víctimas de 13 años de edad a las que también hay que aplicarle su interés superior y prevalencia de derechos, destacando que dicha circunstancia que fue tomada en cuenta por la juez de primera instancia en su decisión.

Por otra parte, consideró que la Ley 1154 de 2007 no choca con el artículo 187 del CIA, pues este último hace referencia a una sanción privativa de la libertad en el Sistema de Infancia y Adolescencia, mientras que la ley 1154 tiene que ver con el término de prescripción, sin hacer diferencia para su aplicabilidad a los adolescentes infractores.

En lo que atañe al cumplimiento de los fines del sistema y de las sanciones que prevé, indicó que ello no es un impedimento para aplicar estas normas relacionadas con la prescripción, máxime cuando en el Código de Infancia y Adolescencia no existe un límite de edad para imponer determinada sanción.

Con ello no desconoce que algunas veces solo sean decisiones de declaratoria de responsabilidad ya que posiblemente ninguna de las sanciones, luego de consultados los criterios, se ajuste a la condición del adolescente, no obstante, indicó que ello no es óbice para dejar de aplicar justicia.

Finalmente, reiteró que el artículo 83 se debe interpretar en su integridad, con las leyes que lo modifican, la 1154 de 2007, la 1426 de 2010 y la 1474 de 2011,

normas vigentes y que producen sus correspondientes efectos hasta tanto no se les haga una revisión por la Corte Constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1 De la competencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 906 de 2004², este Tribunal es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los defensores de Jerson Esneider Rojas y Jeison Garnica Lizarazo, contra el auto del 29 de abril de 2021, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga; los aspectos a resolver se encuentran fijados por aquellos abordados en la alzada y los inescindiblemente ligados a los mismos en virtud del principio de limitación.

7.2. Problema jurídico

En virtud de lo reseñado y de conformidad con el principio de limitación, corresponde a esta Sala examinar si el artículo 1° de la Ley 1154 de 2007 es aplicable al Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes en lo que atañe a la contabilización de los términos prescriptivos.

7.3. Del caso concreto

Así las cosas, emerge evidente que el reparo de los censores se soporta en la sentencia de la Corte Constitucional T-023 del 2019 en la que se plantea lo siguiente:

² “Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia proferían los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito.”

“ (...) la inaplicación del artículo 1.º de la Ley 1154 de 2007 (inciso 3.º del artículo 83 del Código Penal) es viable, siempre y cuando el presunto victimario sea menor de edad al momento de la supuesta comisión de la conducta punible. Esto es así, por cuanto la interpretación según la cual el término de prescripción de la acción penal no se determina con base en esa norma, sino en (i) las sanciones previstas en la Ley 1098 de 2006 y (ii) el inciso 1.º del artículo 83 del Código Penal busca garantizar los principios y fines del sistema de responsabilidad penal aplicable a los menores de edad. En esa medida, no podría extenderse a casos en los cuales el presunto victimario es una persona mayor de edad.”

Con ocasión a dicho pronunciamiento, emerge pertinente precisar inicialmente que, si bien al tratarse de una sentencia de revisión de tutela, su parte resolutive en principio únicamente tiene efectos “inter partes”, ello no es un argumento válido para apartarse de su *ratio decidendi*, como parece plantearlo la juez de primera instancia.

Lo anterior, en el entendido que de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional:

“si bien es cierto que la tutela no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la *ratio decidendi*, constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser el fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma.”³

Dilucidado lo anterior, impera precisar que la decisión reseñada en precedencia contó con salvamento de voto de la H. Magistrada Diana Fajardo Rivera, el cual señaló:

“ El Despacho judicial controvertido decidió apartarse de la norma en cuestión (Art. 1 de la Ley 1154 de 2007), por considerar, además, que contraviene los fines protector, educativo y restaurativo del SRPA. Estoy totalmente en desacuerdo con tal afirmación. El respeto de estos fines no puede ser sinónimo de autorizar la

³ Corte Constitucional T-439 de 2000. Corte Constitucional C-621 de 2015

demora judicial en los casos de delitos sexuales contra menores y, en el peor de los escenarios, la impunidad. Es indispensable interpretarlos también a la luz de principios como la tutela judicial efectiva o el acceso a la administración de justicia de la víctima menor de edad, y así buscar lo que en el ámbito penal se ha reconocido como “*un equilibrio de los intereses contrapuestos en el proceso*”^[29]. En tal virtud, los derechos de las víctimas no deben ser desconocidos durante el ejercicio de la facultad sancionadora del Estado, en casos jurídicamente complejos como el de la referencia. Esto es particularmente predicable en el marco del derecho de los menores de edad, pues, como lo dispone el artículo 6 de la Ley 1098 de 2006, “[l]as normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral” del Código de Infancia y Adolescencia. Se trata de un mandato reforzado de integralidad, con base en el cual las autoridades se encuentran especialmente llamadas a dar aplicación directa a los contenidos de la Carta y del bloque de constitucionalidad pertinente.

En ese sentido, si el SRPA tiene un fin pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos (art. 140 del Código de Infancia y Adolescencia), éste se desatiende cuando lo que se persigue es evadir la aplicación de las normas que propenden por la garantía de la administración de justicia, a partir de interpretaciones absolutas e irrazonables de reglas legales. El artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 garantiza el adelantamiento de un proceso penal en un contexto de plena capacidad de la víctima, pero incluso también del presunto victimario. En asuntos como el estudiado, no resultaría inapropiado desde el punto de vista constitucional admitir que la prescripción de la acción penal se encuentre reglada por la disposición mencionada, pues respetar el cumplimiento de la mayoría de edad de quien alega ser víctima, como condición para dar inicio al término de prescripción, consolida un contexto judicialmente óptimo para adelantar la causa penal bajo el presupuesto de la “*igualdad de armas*” entre los extremos de la misma.”

Por otra parte, la Corte Suprema de justicia en decisión STP15849-2018 del 5 de diciembre de 2018, estableció:

“(…) la Sala reitera que en los procesos penales adelantados contra adolescentes bajo las previsiones de la Ley 1098 de 2006, la prescripción de la acción penal debe calcularse a partir de las sanciones especiales previstas en ese cuerpo normativo y las reglas señaladas en el artículo 83 del Código Penal, con las modificaciones de las Leyes 1154 de 2007, 1426 de 2010 y 1474 de 2011.”

Así las cosas, ante la disparidad de criterios expuesto en precedencia, esta Sala acoge el precedente expuesto por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que al artículo 1 de la ley 1154 de 2007 no es incompatible con los principios y fines del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y en ese sentido es aplicable en el cómputo del término prescriptivo cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad.

Lo anterior, en el entendido que de conformidad con el artículo 144 de la Ley 1098 de 2006: “Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley [906](#) de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.”

En suma, el artículo 173 del Código de Infancia y adolescencia prevé: “la acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad, y en los demás casos contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento Penal.”

En ese sentido, al no existir en el Código de Infancia y Adolescencia una norma especial que regule la figura de la prescripción de la acción penal, resulta irrefutable que se debe acudir a las normas previstas para tales fines en la Ley 906 de 2004, en su artículo 83 con las modificaciones de las leyes 1154 de 2007, 1426 de 2010 y 1474 de 2011, sin que ello implique una transgresión a las garantías procesales de los adolescentes.

Pues, no puede perderse de vista que la referida Ley 1154 de 2007 es posterior a la promulgación del Código de Infancia y adolescencia y a pesar de ello no se hizo distinción alguna en cuanto a su aplicabilidad, comoquiera que no excluyó de su ámbito de aplicación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Ahora, con ocasión a uno de los reparos del censor impera precisar que el hecho de que el proyecto de la Ley 1154 de 2007 se hubiese radicado en el Congreso de la República el 28 de septiembre de 2006, es decir, antes de que se hubiese promulgado la Ley 1098 de 2006, el 8 de noviembre de 2006, ello no desvirtúa el argumento expuesto en precedencia, pues en todo caso la fecha de aprobación del primer debate respecto de la Ley 1154 de 2007 se dio el 6 de diciembre de 2006⁴, es decir cuando ya se encontraba vigente en Código de Infancia y Adolescencia y a pesar de ello, itera la Sala, no se planteó ninguna excepción para la aplicabilidad de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo en lo que atañe al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que dichas circunstancias carecen de trascendencia a la hora de resolver el problema jurídico planteado, en el entendido que el aspecto de medular relevancia en el caso en concreto es la fecha en la que fueron promulgadas estas leyes y su entrada en vigencia, momento a partir del cual comenzaron a producir sus efectos.

Obsérvese que la Ley 1098 de 2006 fue promulgada el 8 de noviembre de 2006 y de conformidad con el artículo 216 entró a regir seis (6) meses después de su promulgación, con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009.

⁴ <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2006-2010/2006-2007/article/138-por-la-cual-se-modifica-el-articulo-83-de-la-ley-599-de-2000-codigo-penal>

Y fue con posterioridad a ello que se promulgó la Ley 1154 de 2007 el 4 de septiembre de 2007, que entro a regir a partir de su promulgación, es decir, que cuando ya estaba vigente el Código de Infancia y Adolescencia, sin que el legislador contemplara ninguna excepción en la aplicación del artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 respecto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Además emerge necesario precisar que al aplicar la referida disposición normativa, no desconoce los principios del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes ni las finalidades de las sanciones previstas por aquel, ya que no se está aplicando al adolescente sanciones previstas en la Ley 906 de 2004 para adultos, pues esta se establecerá conforme las normas especiales que contempla la Ley 1098 de 2006, únicamente se aplica una modalidad especial prevista por el legislador para la prescripción de la acción penal, que está completamente desligada de la sanción a imponer en cada caso.

En atención a las anteriores premisas normativas, en el evento examinado se tiene que la Fiscalía acusó a los adolescentes de la comisión, a título de autor, del delito de acceso carnal violento agravado tipificado en el artículo 205 y 211 numeral 1 y 4 del Código Penal.

Así las cosas, comoquiera que, el delito en comento fue agravado por el numeral 4 del artículo 211 del Código Penal, esto es, al realizarse sobre una persona menor catorce años, debe incrementarse el término de la prescripción de la acción penal de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 adicionado por el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007 en *“veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad”*.

Ahora de conformidad con la interpretación de dicho precepto normativo, se tiene que, una vez formulada la imputación, este corre nuevamente por un término equivalente a la mitad del señalado en precedencia, esto es, 10 años.

Así la ha expuesto la Corte Suprema de Justicia:

“La modificación que introdujo la Ley 1154 de 2007, artículo 1º, a los artículos 83 y 84 de la Ley 599 de 2000, implica que el término de prescripción de la acción penal frente a los delitos a los que se refiere esa disposición es de veinte (20) años contados a partir de cuando la víctima cumpla la mayoría de edad. Durante ese lapso, puede la víctima denunciar (o un tercero) la ocurrencia del hecho, y el órgano encargado de la persecución penal ejercer sus funciones para el esclarecimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del suceso. Si en vigencia del plazo señalado en el precepto, la Fiscalía General de la Nación materializa una resolución de acusación o la formulación de imputación (dependiendo del régimen procesal penal de que se trate), el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal se interrumpe y comienza a correr de nuevo por la mitad del término común indicado en la norma, es decir, tendrá una duración diez (10) años...”⁵

Dilucidado lo anterior, atendiendo a que el 14 de septiembre de 2011 se formuló imputación en contra del adolescente Jeisson Garnica Lizarazo, y el 22 de marzo de 2012 respecto de los adolescentes, la acción penal respecto del delito acceso carnal violento agravado, prescribió el 14 de septiembre de 2021 y el 22 de marzo de 2022 respectivamente, es decir, 10 años después de haberse formulado la correspondiente imputación.

Así las cosas, en este momento carece la Sala de facultad para emitir fallo de segundo grado ya que ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción, razón por la cual la única actuación que se impone a la Colegiatura es la de reconocer que ha cesado la potestad punitiva del Estado y al encontrar configurada la causal objetiva de que trata el numeral 1º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, decretó la preclusión por prescripción de la acción penal.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes,

⁵ CSJ SP, 25 nov. 2015, rad. 46325.

RESUELVE

PRIMERO. - Declarar extinguida, por prescripción, la acción penal adelantada en contra de Exson Alirio Anaya Espinosa, Omar Alexander Flórez Rivero, Jerson Esneider Rojas, Johan Sebastián Moreno Rodríguez, Jeison Garnica Lizarazo., por el presunto delito de acceso carnal violento agravado tipificado en el artículo 205 y 211 numeral 1 y 4 del Código Penal y, en consecuencia, decretar en su favor la preclusión por el mencionado cargo.

SEGUNDO. - Advertir que contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y Cúmplase


SHIRLE EUGENIA MERCADO LORA

Magistrada

XIMENA ORDOÑEZ BARBOSA

Magistrada

JOSÉ MAURICIO MARÍN MORA

Magistrado

Firmado Por:

**Shirle Eugenia Mercado Lora
Magistrado
Sala 05 Penal
Tribunal Superior De Bucaramanga - Santander**

**Jose Mauricio Marin Mora
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

**Ximena Ordoñez Barbosa
Magistrada
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Bucaramanga - Santander**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **324e9de6b6a6f5ff380653c39db3176fc58e0243374e71aafd173372837bda8f**

Documento generado en 12/04/2023 03:20:02 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
SALA DE DECISIÓN PENAL**

Magistrada Ponente: Shirle Eugenia Mercado Lora

Radicación: 680016000159-2022-05261 (22-865A)
Procedencia: Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga
Acusado: Candy Lizmar Sandoval Escalona
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
+Asunto: Desistimiento
Decisión: Acepta desistimiento
Aprobado: Acta No. 348
Fecha: 17 de abril de 2023

I. ASUNTO POR DECIDIR

Procede la Sala a resolver el desistimiento presentado por la fiscalía respecto del recurso de apelación que interpuso contra el auto del 21 de noviembre de 2023 mediante la cual el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga negó la solicitud de preclusión elevada por el ente acusador con fundamento en el numeral 1 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal.

II. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga profirió el auto antes referido del 21 de noviembre de 2022, contra el cual el ente acusador interpuso y sustentó recurso de apelación dentro del término legal establecido para ello.

Luego, encontrándose el asunto asignado a esta Sala para resolver el recurso señalado, la Fiscal Octava Seccional de la Unidad de investigación y Juicio presentó un memorial¹ el 28 de marzo de 2023, en el que informa que desiste del recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Sería del caso entrar a revisar la providencia impugnada, si no se observara que, dentro del término legal - artículo 179F de la Ley 906 de 2004-, esto es, antes de que la Sala lo haya resuelto, se presentó desistimiento del recurso de apelación.

¹ 08CorreoAllegaDesistimiento.pdf. Expediente digital

Luego, en vista de que la alzada promovida aún no ha sido resuelta por la Sala², y a que el desistimiento de este recurso fue presentado por la parte quien lo postuló, esto es la Fiscalía, entonces, es procedente su aceptación al observar el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto prevé la Ley 906 de 2004.

Así las cosas, quedará en consecuencia ejecutoriada la decisión de primera instancia, por lo cual se dispondrá la remisión de este asunto a la Fiscalía Octava Seccional de la Unidad de Investigación y Juicio para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE

Primero. - Aceptar el desistimiento del recurso de apelación presentado por la Fiscal Octava Seccional de la Unidad de investigación y Juicio conforme a las consideraciones antes expuestas.

Segundo. - Devolver la actuación a la Fiscalía Octava Seccional de la Unidad de investigación y Juicio de origen para que se continúe con el trámite respectivo.

Tercero. - Advertir que contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


SHIRLE EUGENIA MERCADO LORA
Magistrada


GUILLERMO ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOSA
Magistrado


SUSANA QUIROZ HERNÁNDEZ
Magistrada

Proyecto registrado: 14 de abril de 2023

² Art. 179F de la Ley 906 de 2004.